

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN** procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por **GLORIA INÉS ECHAVARRÍA ESCOBAR** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-008-2019-00305-01**.

AUTO

Se observa escrito mediante el cual, el abogado FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, invocando su calidad de representante legal de la firma de abogados PALACIO CONSULTORES S.A.S. presenta poder para actuar en este proceso en representación de COLPENSIONES y a su vez sustituye el poder a la abogada NATHALY ANDREA VALENCIA HINESTROSA. Revisado el expediente, se halla copia de la escritura pública No. 716 de 15 de julio de 2020, a través de la cual COLPENSIONES le confiere poder especial a la referida sociedad para actuar como apoderado judicial en procesos en su contra. En atención a lo anterior, se le confiere personería para representar los intereses de la entidad a la firma de abogados PALACIO CONSULTORES S.A.S, como apoderada principal y a la abogada NATHALY ANDREA VALENCIA HINESTROSA, portadora de la TP. 274.197 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA, y que, como consecuencia de lo anterior, se condene a COLPENSIONES, al reconocimiento de la citada prestación de manera retroactiva desde el 29 de junio de 1995, con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, anota la demandante, que el señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA, estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social en pensiones en el ISS hoy COLPENSIONES, falleciendo por causas de origen común el día 29 de junio de 1995.

Aduce que contrajo matrimonio católico con el causante el 29 de noviembre de 1964, conviviendo por más de 30 años, sin separación, compartiendo techo, lecho y mesa.

Afirma la accionante que por considerar que tenía cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, la solicitó a COLPENSIONES el 15 de junio de 2016, misma que fue contestada de manera negativa mediante Resolución GNR 265087 del 07 de septiembre de 2016, por evidenciar que se encontraba separada de hecho de su cónyuge desde hacía más de un año con anterioridad al fallecimiento de éste.

Expone la actora, que lo afirmado por COLPENSIONES no es cierto, ya que la investigación administrativa para verificar el tiempo real de convivencia de la pareja, se aparta de la realidad fáctica y jurídica.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La *a quo*, despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, argumentando que, si bien el causante había dejado acreditadas las semanas mínimas para que los posibles beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes, en este caso la accionante teniendo la carga probatoria, no había demostrado la convivencia con el causante por espacio de 5 años anteriores al fallecimiento, es decir, que no demostró la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada judicial de la demandante apela la sentencia, argumentando que la juez de instancia no realiza una correcta interpretación del interrogatorio de parte rendido por la demandante, quien si bien indicó la separación de hecho ocurrida meses antes de la muerte del señor JAIRO, en la misma declaración demostró al igual que lo confirmó el testimonio de la señora ANA MARÍA, que veló por la salud y los cuidados de quien era su esposo en sus últimos días de vida.

Indica la recurrente, que la separación de la pareja no fue generada por voluntad propia, es decir, la voluntad mutua de los cónyuges por dar terminado el vínculo matrimonial, sino que se dio en razón a los maltratos verbales y psicológicos y tras la manifestación expresa del causante de abandonar la residencia de donde convivía con su esposa, suegra y cuñada, se retiró del hogar pero no abandonó la comunidad de vida, el apoyo y auxilio mutuo características propias del vínculo matrimonial.

Expone, que tal y como se afirma en las excepciones propuestas a la demanda, la entidad accionada basó su planteamiento opositor en sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que señalan que la convivencia puede darse en cualquier tiempo, es decir, afirma que la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho acceder a la pensión de sobrevivientes, es la vigencia del vínculo matrimonial, máxime que en este caso el causante no se encontraba conviviendo con otra persona.

Por otro lado, indica que la referida Corte en sentencia con radicación 39641 del 15 de febrero de 2011, consideró que ante el supuesto de existir simultaneidad de convivencia, reconoce cuota parte a la cónyuge que convive con el pensionado o afiliado manteniendo el vínculo, aun existiendo separación de hecho en razón a la convivencia tras una unión marital de hecho, es decir, que si se mantiene el vínculo, pese a la separación de hecho, debe existir proporcionalidad para no privar a la esposa del reconocimiento de la pensión, en el evento de no ocurrir el presupuesto de la compañera, tal cual ocurre en el presente asunto, le corresponde a la demandante el 100% de la pensión de sobrevivientes, toda vez que si se ha admitido por la Corte la separación de hecho manteniéndose el vínculo matrimonial, los presupuestos de apoyo o auxilio mutuo tal y como se demuestra en este caso, le es aplicable la teoría jurisprudencial referenciada y para que haya una verdadera justicia, se debe proceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por haber convivido con el causante por más de 30 años.

Concluye indicado que en este proceso no es objeto de debate el tema de las semanas cotizadas por el afiliado antes del fallecimiento, sino que el conflicto radica en la separación de hecho de los cónyuges meses antes de la muerte del afiliado, no obstante, reitera que los fundamentos jurisprudenciales respaldan los presupuestos fácticos planteados por la demandante en el sentido que el vínculo terminó por la muerte, ya que hasta la fecha de tal suceso se conservó el apoyo y auxilio mutuo de los cónyuges.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguno de los apoderados de las partes presentó escrito de alegatos de conclusión.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la actora probó en el proceso cumplir con los requisitos legales que establece la original Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de sobrevivientes que esta Ley regula.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia conforme la Art.10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

6. CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Para resolver la apelación presentada por la parte demandante, sea lo primero manifestar que como quiera que el causante de la pensión de sobrevivientes demandada falleció el **29 de junio de 1995**, como se prueba con el registro civil de defunción obrante a folio 10 del archivo N°1 del expediente digital, y quien al momento del fallecimiento tenía la calidad de afiliado, las normas legales a aplicar para definir el derecho que tenga o no la demandante a la pensión pretendida, es la vigente para la

fecha del deceso, en este caso, es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, el cual establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(...)

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los párrafos del artículo 33 de la presente Ley.”

De conformidad con lo anterior, una vez revisada la historia laboral del señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA y que se encuentra en el folio 51 del archivo N°1 del expediente digital, la misma da cuenta que para el momento del fallecimiento del causante, esto es, 29 de junio de 1995, se encontraba realizando cotizaciones al sistema, de manera que solo requería acreditar haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, semanas que supera con creces, pues según el registro de cotizaciones en cuestión, en toda su vida laboral alcanzó a cotizar un total de 495.14 semanas, dejando así causado el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Ahora, en cuanto a los beneficiarios de la citada prestación, el artículo 47 de la Ley 100 en su texto original consagró:

“ARTÍCULO 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;”

En ilación a lo anterior, la SCL de la Corte Suprema de Justicia, al interpretar el art. 47 de la citada Ley 100 de 1993, señaló en sentencia SL 4099 de 2017 lo siguiente:

“Esta sala de la Corte ha sido consistente en adoctrinar que, en el marco del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, cuya aplicación a este asunto no

se discute, el parámetro esencial para determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es la *convivencia efectiva*, real y material entre la pareja, y no tanto la naturaleza jurídica del vínculo que se tenga, de manera que, *prima facie*, no existe una preferencia de la *cónyuge superviviente* sobre la compañera permanente, por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial vigente, sino que siempre debe acreditarse el requisito de la convivencia, entendida como la que,

[...] se puede predicar de quienes además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo –elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del CC-, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales... (CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 29601, reiterada en CSJ SL5640-2015).

En ese sentido, la Corte ha precisado que tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material, por el término establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostración del vínculo matrimonial, para tener la condición de beneficiario. En la sentencia CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, reiterada en CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ SL460-2013 y CSJ SL13544-2014, entre otras, la Corte explicó su orientación, que se corresponde en un todo con las reflexiones del Tribunal:

Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no basta con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede predicar de quienes, además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo -elemento esencial del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales.

(...)

Al respecto también se pueden ver las sentencias CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, en la que se reafirmó aquella visión del concepto de familia que reivindicó el Tribunal, según la cual «...*la Constitución Política de Colombia de 1991 dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico y la que ha tenido origen en lazos naturales.*» y se ratificó que el parámetro a tener en cuenta por el juez laboral era,

[...] la convivencia -entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado [...]

Lo anterior no obsta para precisar que la Sala ha sostenido que la cónyuge sí tiene un derecho preferencial a recibir la pensión de sobrevivientes, en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, pero cuando demuestra la

convivencia por el término legal y se enfrenta a hipótesis de *convivencia simultánea* con una compañera permanente hasta el momento de la muerte, que no es la situación que encontró demostrada el Tribunal en este asunto.”

Acorde con lo explicado, la Ley 100 de 1993 estableció conforme la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son el cónyuge o compañero o compañera permanente, no obstante, el criterio decisivo para la definición del derecho es la convivencia material de la pareja, de manera que prima ante cualquier circunstancia la comunidad de vida, la convivencia, el acompañamiento y el apoyo mutuo.

Así las cosas, conforme a la normatividad y la sentencia reseñada en precedencia, es menester que la demandante, pruebe haber convivido maritalmente con el causante de la pensión pretendida al menos por 2 años continuos hasta el momento del deceso de éste, por lo que se hace necesario, entrar a valorar la prueba testimonial decretada y practicada en el proceso.

El testigo **DORMAN HERNANDO MARÍN TOBÓN** (cuya declaración se encuentra a partir del minuto 35:34 y siguientes de la Audiencia de Trámite y Juzgamiento), al rendir su declaración, manifestó conocer a la demandante desde hace tres años. De igual forma, indicó que no conoció al señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA, razón por la cual las partes se abstuvieron de hacerle preguntas respecto al tema debatido.

También declaró la señora **ANA MARÍA OCHOA GRACIANO** (minuto 39:28 de la Audiencia de Trámite y Juzgamiento), señalando que conoce a la demandante desde hace más de 35 años, no obstante, dijo que nunca conoció de manera personal al señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA. Manifiesta la declarante que la demandante es viuda, ya que el señor JAIRO se enfermó y en esa época, la señora GLORIA se fue a vivir a su casa, porque antes vivía con el esposo, la suegra y dos hermanas del esposo, no obstante, manifiesta que cuando se llevaron al señor JAIRO para la clínica hospitalizado, a la señora GLORIA la sacaron de la casa en la que vivía, señalando incluso que para el momento del fallecimiento del señor JAIRO, la señora GLORIA llevaba viviendo dos meses con ella.

Relata la declarante, que la señora GLORIA tuvo tres hijos con el causante y dos hijos más por fuera del matrimonio, pero desconoce quién es el padre de sus últimos hijos o que edades tienen, así como también dijo desconocer quién es el señor OVIDIO.

Por su parte, se practicó interrogatorio de parte a la señora **GLORIA INÉS ECHAVARRÍA ESCOBAR**, quien manifestó que fue casada con el señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA por más de 30 años. Afirma que siempre vivió con su esposo en el barrio Castilla, con su suegra y dos hermanas de su esposo y que producto de dicha unión tuvieron tres hijos. Dice que en los últimos días de enfermedad de su esposo se separaron porque a él lo hospitalizaron y que mientras estuvo enfermo se fue a vivir donde una amiga, ya que no se llevaba muy bien con la mamá de él y la maltrataban. Dice que su cónyuge estuvo hospitalizado 9 meses, tiempo durante el cual lo estuvo visitando en el hospital, pues iba más o menos 3 días a la semana. También afirma que la separación fue a razón de la enfermedad del señor JAIRO y que se demoró en solicitar la pensión porque no sabía que tenía derecho. Dice que cuando solicitó la pensión, a su casa fueron unas personas de COLPENSIONES y los atendió un señor que vivía en su casa de nombre OVIDIO, más adelante en su declaración relata que el señor OVIDIO fue su compañero permanente con quien vivió alrededor de 1 año. Dice que nunca convivió de manera simultánea con su esposo y con otra persona, porque después del fallecimiento de JAIRO, se demoró mucho tiempo en volver a tener pareja.

Al proceso también fueron allegadas pruebas documentales, entre ellas la declaración extra proceso rendida por el señor ANÍBAL DE JESÚS YEPES ARTEAGA el 15 de abril de 2016, ante el Notario Dieciséis de Medellín, quien declaró haber conocido al señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA desde hace más de 15 años. Indicó que éste era casado con la señora GLORIA INÉS ECHAVARRÍA ESCOBAR desde el 29 de noviembre de 1964, con quien compartió lecho, techo y mesa de manera ininterrumpida y continua hasta la fecha de su muerte, sin que mediara separación alguna entre los cónyuges, refiriendo que el señor JAIRO veló económicamente por la señora GLORIA hasta la fecha del fallecimiento.

También hay una declaración extraproceso rendida por el señor JOSÉ JAIRO GÓMEZ FRANCO el 15 de junio de 2016 ante la Notaria Dieciocho del Círculo de Medellín, en la que declara que conoció al señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA por más de 30 años. Dice que le consta que éste contrajo matrimonio bajo el rito católico el día 29 de noviembre de 1964 con la señora GLORIA INÉS ECHAVARRÍA ESCOBAR, unión de la cual procrearon 3 hijos. Dice que la pareja compartió techo, lecho y mesa desde el matrimonio sin interrupción alguna y que era el señor JAIRO la única persona encargada del sostenimiento económico de su esposa.

También reposa una declaración extraproceso rendida por la demandante el 10 de marzo de 2016 ante la Notaria Dieciocho del Círculo de Medellín, en la que declara que contrajo matrimonio católico el día 29 de noviembre de 1964 con el señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA, con quien compartió techo, lecho y mesa desde la fecha del matrimonio, siempre unidos sin ninguna interrupción.

Finalmente, en el expediente administrativo que reposa en el plenario, se visualiza el INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN realizado por el consorcio COSINTE-RM para COLPENSIONES, con el fin de indagar sobre la convivencia de la señora GLORIA INÉS ECHAVARRÍA ESCOBAR con el señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA, la cual fue realizada el 07 de septiembre de 2016 y del análisis de pruebas recolectadas, se extrae lo siguiente:

“En la dirección Diagonal 57 # 47 b 16 apto 203 barrio Niquia del municipio de Bello, donde abre la puerta y se dialoga con el señor Ovidio Tejada, el cual manifestó ser el esposo de la señora Gloria Inés Echavarría desde hace más de 20 años y manifiesta que ella no se encuentra en la casa porque permanece trabajando.

Informó que la señora Gloria Inés Echavarría estuvo casada con el señor Jairo León Córdoba Rúa, con él vivió en el barrio Castilla. Confirmó que cuando conoció a la señora Gloria Inés, el señor Jairo León aún estaba vivo pero ella se encontraba sola y viviendo aparte. Afirma que inicio la convivencia con ella antes de que el señor Jairo León falleciera y que él vivía con una hija y hermanas.

Se tiene comunicación con la señora Gloria Inés Echavarría Escobar, Informó haber sido la esposa del señor Jairo León Córdoba Rúa y haber vivido con el hasta que falleció, tuvieron tres hijos de los cuales hay solo una mujer viva.

Al respecto de lo informado por el señor Ovidio Tejada, acerca de que el señor Jairo León Córdoba Rúa al momento de fallecer vivía con unas hermanas, la solicitante respondió que realmente ellos siempre vivieron con la familia del causante. Posteriormente cambia la información suministrada y reconoce que antes del fallecimiento ella si había tenido una separación con el señor Jairo León, en la cual ella se fue para donde una hermana de ella en Girardota pero que cuando él se enfermó ella regreso a acompañarlo en la clínica.

Ante la demora para solicitar la prestación económica por el fallecimiento del señor Jairo León Córdoba Rúa, manifiesta que esto se debió a los problemas que tenía con las hermanas de él, ya que recibió amenazas de Rosa la hermana del señor Jairo León, porque ella decía que la prestación le correspondía era a ella.

De acuerdo con la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y labor de campo, se establece que el señor Jairo León Córdoba Rúa, no convivía con la señora Gloria Inés Echavarría Escobar, al momento de su deceso, toda vez que mediante análisis de los testimonios suministrados se pudo evidenciar que se encontraban separados de hecho hacía más de un año antes del fallecimiento del

causante y la solicitante sostenía relación de convivencia con quien aún es su actual compañero permanente.”

Valorada la prueba documental, testimonial y de interrogatorio de parte, con ella, no se acredita la convivencia permanente de la actora de manera continua e ininterrumpida con el causante en los dos años anteriores al fallecimiento de este, pues lo que queda en evidencia, es que el señor JAIRO LEÓN para la fecha de su deceso, se encontraba hospitalizado, sin que la demandante hubiera logrado demostrar que durante ese interregno de tiempo, permaneció al lado del causante brindándole el apoyo que necesitaba en su momento, pues los testigos traídos al proceso, dijeron que nunca conocieron al señor JAIRO LEÓN CÓRDOBA RÚA.

Ahora, a pesar que la señora ANA MARÍA OCHOA GRACIANO dijo conocer la situación porque para el momento en que el señor JAIRO LEÓN estuvo hospitalizado la demandante GLORIA INÉS estuvo viviendo en su casa, lo cierto es que lo que lo afirma, es porque la misma accionante se lo contó, ya que no fue testigo presencial de la relación que pudo tener la accionante con su cónyuge, ya que ni siquiera conoció al causante, ni los visitó en el hogar que tenía la pareja.

Respecto de las declaraciones extraproceso que obran en el plenario, si bien las mismas dan cuenta al unísono que el señor JAIRO LEÓN y la señora GLORIA INÉS convivieron de manera ininterrumpida desde el matrimonio hasta el deceso del causante, ninguna de ellas da cuenta del periodo en que la misma demandante confesó que hubo separación en razón de la enfermedad de su esposo JAIRO LEÓN, por lo que dichas declaraciones en apariencia tratan de beneficiar a la demandante, pero no dan cuenta de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la relación de pareja entre la demandante y el causante, es decir que no contiene la ciencia del dicho, por lo que no pueden ser tenidas como prueba de la convivencia marital exigida por la Ley.

Para la Sala es relevante la investigación administrativa realizada por COLPENSIONES, en la que concluye que la demandante no acreditó el requisito de convivencia con el causante, porque para el momento del fallecimiento del señor JAIRO LEÓN, ésta ya se encontraba conviviendo con un señor de nombre OVIDIO, y es importante traer a colación este aspecto, porque aunque dicha investigación no tiene la firma de la declaración del señor OVIDIO TEJADA, lo cierto es que la misma señora GLORIA INÉS al ser cuestionada sobre la relación que tuvo con el señor OVIDIO, manifestó que en efecto para la fecha en que la entidad realizó tal

investigación convivía con él, afirmando incluso que el señor OVIDIO fue entrevistado por los funcionarios de COLPENSIONES porque ella no se encontraba en la casa, pero afirma desconocer los términos de la declaración de quien fuera su compañero permanente.

Aunado a lo anterior, al momento de ser interrogada la demandante por la juez de instancia sobre la relación que tuvo con el señor OVIDIO, fue esquivada en responder las preguntas y manifestó que con él solo convivió por espacio de un año, cuando en la investigación administrativa el señor OVIDIO dijo que fue más de 20 años y que la relación empezó incluso antes del fallecimiento del señor JAIRO LEÓN.

También sorprende a la Sala el hecho que la demandante no manifestara la procreación de dos hijos más luego del fallecimiento de su esposo, hechos que fueron traídos a colación por la testigo ANA MARÍA OCHOA GRACIANO, quien a pesar de manifestar ser muy amiga de la demandante, indicó que desconocía la edad de dichos hijos y el nombre del padre de los mismos, por lo que la Sala valora con cautela dicha declaración, pues los únicos recuerdos claros que parece tener dicha declarante, son los que tienen que ver con la convivencia de la pareja, pero respecto de los demás aspectos de vida de la señora GLORIA INÉS, parece desconocerlos o no recordarlos.

Conforme a lo explicado, no se logra demostrar por la demandante, los dos años de convivencia requeridos con anterioridad al deceso del causante para que pudiera predicarse como beneficiaria de la prestación de sobrevivientes, pues no demostró si la separación que se dio con el señor JAIRO LEÓN fue producto de la enfermedad de éste o producto de los maltratos que dijo recibir de parte de su esposo o si es que medio entre la pareja alguna separación por la presencia de una tercera persona en la relación, porque como se dijo anteriormente, ninguno de los testigos en realidad conoció o fue testigo presencial de la relación sentimental que tuvo la demandante con el causante.

Finalmente se aclara que los cinco años de convivencia en cualquier tiempo para el caso de los esposos a que hace referencia el apoderado de la demandante en la apelación, solo aplican para los casos en los que la muerte del causante o la causante ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues fue esta Ley la que estableció tal posibilidad, pero como en este caso el causante falleció en el año 1995, no son aplicables las preceptivas de la Ley 797 de 2003.

Conforme las consideraciones, fácticas probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada será CONFIRMADA, pero por las razones expuestas en esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante por haber resultado vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 05 de agosto de 2020, proferida por el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente proceso adelantado por la señora **GLORIA INÉS ECHAVARRÍA ESCOBAR** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2efd5e12173d45736b56dd15f39558e8fc93249c12616305ce438b56a78aea65**

Documento generado en 16/03/2023 02:06:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>